



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
PERÚ 2021



BOLETÍN INFORMATIVO JUSTICIA AMBIENTAL



Editado por:

Ministerio del Ambiente.

Av. Antonio Miroquesada 425
Magdalena del Mar, Lima - Perú

www.gob.pe/minam

ACCIONES EN JUSTICIA AMBIENTAL



Los ecosistemas ofrecen un conjunto de beneficios económicos, sociales y ambientales a favor de la sociedad, sin embargo, éstos se encuentran cada vez más amenazados como consecuencia de actividades ilícitas que ponen en serio riesgo su sostenibilidad. Una estimación a nivel mundial efectuada recientemente por tres entidades: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, dimensiona el valor monetario de toda la delincuencia organizada contra el ambiente, la que asciende entre 70 000 y 213 000 millones de dólares anuales.

Entre los graves delitos ambientales está el creciente comercio ilícito de vida silvestre, que constituye una de las mayores

amenazas para la conservación de la diversidad biológica a nivel mundial, por el impacto directo que genera sobre la supervivencia de las especies (conduce a su reducción o, incluso, a su eliminación), la alteración del estado de los ecosistemas, la destrucción de hábitats naturales únicos y la privación de medios de subsistencia para las poblaciones locales. Además, las diferentes modalidades de los delitos contra la vida silvestre han ocasionado la dispersión de patógenos y aparición de nuevas enfermedades en las personas, animales domésticos y la fauna nativa de los países involucrados. En efecto, aproximadamente el 60 % de todas las enfermedades infecciosas emergentes en seres humanos son de origen animal, por lo que el comercio ilegal de vida silvestre no solo representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, sino también para la salud pública.

Asimismo, el último “Informe Mundial sobre los delitos contra la vida silvestre – Tráfico de Especies Protegidas” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, señala que los delitos contra la vida silvestre están extremadamente extendidos en todo el planeta. Este informe registra información de aproximadamente 180 000 confiscaciones en 149 países, dando cuenta que entre 1999 y 2018 se han incautado casi 6 000 tipos de especies diferentes de fauna y flora, entre mamíferos, reptiles, aves, peces y corales.

La magnitud del comercio ilegal de vida silvestre se estima entre 8 y 23 mil millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los ilícitos más grandes a nivel global. Asimismo, en diversos espacios multilaterales, se ha invocado a los Estados y a la sociedad en su conjunto a adoptar medidas decisivas y articuladas a nivel regional para evitar el comercio ilegal de flora y fauna silvestre. En el Perú, tenemos que existen 318 especies amenazadas por este delito y 86 de ellas están en alguna categoría de amenaza. De acuerdo con información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) durante el periodo 2000-2017 las autoridades peruanas decomisaron 79,025 animales silvestres vivos. De ese total, cerca de 18,000 pertenecían a 11 especies categorizadas en peligro crítico.

De acuerdo con la información del INTERPOL, el comercio ilegal de madera y los delitos forestales representan entre 30 000 y 100 000 millones de dólares anualmente, a saber, entre un 10% y un 30% del comercio total de madera en todo el mundo. Por eso es fundamental que la lucha contra la tala ilegal tenga un énfasis sobre lo que sucede en el bosque y también sobre toda la cadena de comercio y evaluar de qué manera la gobernanza ambiental puede contribuir a fomentar la prevención y el cumplimiento de la legalidad. En esa medida, es necesario contar con estrategias de lucha contra la tala ilegal, que comprende también el comercio de productos de origen ilegal asociado a ella, así como

la prevención de delitos tales como el trabajo forzoso o situaciones de trabajo infantil, en las que pudieran estar involucrados grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Adicionalmente, de acuerdo con la información de la Procuraduría Pública especializada en Delitos Ambientales al 2020, tenemos que este tipo de ilícitos han experimentado un crecimiento constante a lo largo de los años. Desde el año 2009 hasta el 2020, los delitos ambientales han incrementado su número en aproximadamente un 500%. Durante el año 2019, se alcanzó el pico máximo representado en 5414 casos. Resulta reveladora la cifra de 4528 casos de delitos ambientales reportados durante el 2020, en el marco de la Pandemia declarada a partir de la propagación del Covid – 19, lo que evidencia que, a pesar de estas contingencias sanitarias, la ilegalidad ha continuado generando impactos sobre los ecosistemas y sobre los recursos naturales.





Adicionalmente y en línea con lo anterior, la mayoría de los delitos ambientales son delitos contra los recursos naturales y ocurren principalmente en la Amazonía peruana representando más del 60% del total de delitos ambientales que se cometen en el Perú. Los delitos de tala ilegal, contra formaciones boscosas, y minería ilegal, así como tráfico ilícito de flora y fauna silvestre explican en buena cuenta la situación del incremento significativo de los delitos ambientales, así como su incidencia en la Amazonía Peruana.

Además, estos delitos ocurren en contextos mucho más amplios de ilegalidad. Por lo general, ocurren de manera conjunta o son consecuencia de actividades asociadas al tráfico ilícito de drogas, el tráfico de insumos químicos, trata de personas, sicariato, tráfico de tierras, entre otros. Y como consecuencia de ello, tenemos que son actividades ilícitas que no sólo afectan los ecosistema y diversidad biológica, sino también los derechos fundamentales de las personas.

En efecto, a partir del mes de abril del 2020 hasta la actualidad, 7 defensores ambientales han perdido la vida como

consecuencia de actividades ilegales que afectan el medio ambiente y los recursos naturales. Ello deja en clara evidencia, que los Delitos Ambientales, más allá de su indudable impacto ambiental, representa una amenaza seria para la seguridad pública, el orden interno y la vigencia del Estado de Derecho.

De otro lado, los delitos de contaminación han experimentado un crecimiento notable durante los últimos años, si bien en menor proporción respecto a los delitos contra los recursos naturales, no podemos dejar de soslayar su importancia gravitante dentro de una estrategia integral contra los delitos ambientales. Así tenemos que, conforme a la información reportada por la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, hasta el 2020, se cuenta con 4678 procesos en giro respecto a delitos de contaminación ambiental regulado en el artículo 304 del código penal y 841 procesos asociada a la disposición y manejo ilegal de residuos sólidos conforme el artículo 306 del código penal.

1.

Se creó la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, UNIDA,

dentro del Ministerio del Ambiente, encargada de analizar y proponer medidas que permitan atacar las causas regulatorias, institucionales y económicas que incentivan la comisión de delitos ambientales, bajo un enfoque estrictamente preventivo y buscando una complementariedad con las distintas entidades del sistemas de administración de justicia y el sistema de gestión ambientales, para fortalecer y mejorar los resultados del Estado en la lucha contra los delitos ambientales.

UNIDA busca alcanzar los siguientes objetivos: i) Generar información, análisis y propuestas para prevenir y reducir los delitos ambientales, ii) Colaborar con las demás entidades competentes en la implementación de las medidas de reconocimiento y protección de defensores ambientales y iii) Establecer un trabajo mucho más articulado entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y las Entidades de Administración de Justicia.



2.

Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Mediante Decreto Supremo N° 04-2021-JUS, se aprobó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. EL MINAM, junto con otros sectores, aportó a la elaboración de dicho mecanismo, por lo que contiene una serie de medidas de prevención, reconocimiento, protección y acceso a la justicia ambiental a cargo del sector Ambiente para garantizar un entorno propicio a favor de los defensores ambientales.

Por ello el mencionado mecanismo intersectorial establece que el MINAM elaborará informes sobre la situación de los defensores ambientales en el Perú y propondrá medidas para garantizar su protección y proveerá capacitación a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas respecto a los temas ambientales y de acceso a los recursos naturales. Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizará supervisiones ambientales, ante situaciones de riesgo que enfrenten los defensores ambien-

tales, para efectos de verificar el cumplimiento de la regulación ambiental y disponer las medidas que permitan mitigar el riesgo ambiental que pueda afectar a los defensores ambientales. Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas brindará apoyo a la Policía Nacional del Perú en caso se requiera la evacuación de los defensores de los derechos humanos que se encuentren ubicados en una zona de riesgo y en el ámbito de influencia de las áreas naturales protegidas.

Finalmente, el Mecanismo Intersectorial establece la obligación de que cada uno de los sectores que participan en el mecanismo designen un representante con capacidad de decisión para atender todos los aspectos concernientes a la protección de los defensores ambientales. En el caso del Ministerio del Ambiente, se designó a la coordinación de la UNIDA como coordinador responsable ante el mecanismo intersectorial.



3.

Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los delitos ambientales.

El Consejo de Ministros, en base la propuesta del MINAM, aprobó la creación de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los delitos ambientales, mediante Decreto Supremo N° 011-2021-MINAM. Esta instancia conformada por ministros de Estado de varios sectores, está encargada de proponer medidas para la prevención y reducción de los delitos ambientales, así como coadyuvar a mejorar la respuesta y efectividad del Estado frente a la comisión de ilícitos penales que afecten el ambiente.

En su sesión del 05 de julio, la mencionada Comisión se aprobó el Plan de Actividades correspondiente al periodo 2021-2022 y su Reglamento Interno, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 140-2021-MINAM. El plan de actividades contiene las acciones concretas tales como elaborar estudios sobre los incentivos económicos en la cadena de valor de los delitos ambientales, efectuar un estudio que valore el impacto económico de los delitos ambientales en el Perú, brindar apoyo en la implementación de la “Propuesta técnica para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana” elaborada en el marco del Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, así como implementar una plataforma de información que permita la comunicación interinstitucional entre las entidades de fiscalización ambiental y las autoridades del Sistema de Administración de Justicia y mecanismos de información sobre la ocurrencia de actividades ilícitas en el ámbito de los territorios de los pueblos indígenas en contacto inicial y aislamiento voluntario para la adopción de medidas preventivas, entre otros.



4.

Protocolo Sectorial para la protección de personas Defensoras Ambientales.

En el marco del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, el MINAM aprobó el Protocolo Sectorial para la protección de personas Defensoras Ambientales, mediante Resolución Ministerial N° 134-2021-MINAM. Este protocolo es una herramienta de gestión que busca establecer los lineamientos generales para la coordinación, implementación y evaluación de la aplicación de las medidas de prevención, reconocimiento y protección a cargo del Sector Ambiental para efectos de garantizar los derechos de los Defensores Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

En esa medida, el protocolo tiene como ámbito de aplicación los órganos de línea, programas y proyectos especiales del Ministerio del Ambiente, así como a sus respectivos organismos adscritos para efectos de garantizar una intervención integral del sector ambiental en materia de protección de los derechos de las y los Defensores Ambientales.

Dicho protocolo precisa la elaboración y alcances del “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en el Perú” el que analizará, en el marco de un proceso participativo, los principales desafíos y riesgos que enfrentan las





personas Defensoras Ambientales a partir de lo cual se formularán recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y el marco institucional y legal vinculado con la protección de los Defensores Ambientales en el Perú, así como proponer medidas contra los factores de riesgo para eliminar o mitigar sus causas.

Respecto a las situaciones de riesgo, el protocolo establece que los órganos de línea, programas y proyectos especiales del Ministerio del Ambiente, así como sus organismos adscritos deben reportar las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras ambientales, identificadas durante el ejercicio de sus funciones. Dicho reporte será remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su incorporación en el Registro sobre Situaciones de Riesgo de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El Protocolo también establece mecanismos de coordinación sectorial para el diseño de las medidas de protección que se otorgarán en el marco del Procedimiento de Alerta Temprana a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, delimita los roles de los organismos adscrito y demás órganos del MINAM en la implementación de las medidas de protección a favor de los defensores ambientales; cuya monitoreo y evaluación respecto a su eficacia estará a cargo de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, UNIDA.

Como parte de las medidas de reconocimiento, el Protocolo establece el otorgamiento, de manera honorífica, de la Condecoración del Árbol de la Quina a las personas defensoras ambientales que debido a sus acciones distinguidas han contribuido con la defensa y promoción del derecho a gozar de un medio ambiente sano y sostenible, a través de acciones extraordinarias de defensa y promoción de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

5.

Primer Programa de Capacitación sobre Mecanismos de Protección a favor de las Personas Defensoras Ambientales y Estrategias para prevenir los Delitos Ambientales.

Como parte del proceso de aplicación de estas medidas para mejorar la justicia ambiental en el país, el MINAM, a través de la UNIDA, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, se realizó el Primer Programa de Capacitación sobre Mecanismos de Protección a favor de las Personas Defensoras Ambientales y Estrategias para prevenir los Delitos Ambientales.

Dicho programa de capacitación tuvo como finalidad, generar las capacidades necesarias para que los representantes de la sociedad y organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas conozcan y apliquen el marco normativo en materia de protección de defensores ambientales y, a su vez, tengan información sobre las estrategias que se vienen implementando para prevenir los delitos ambientales en el Perú.

Dicho programa de capacitación se realizó el 14, 16, 18, 21 y 23 de junio bajo dos bloques temáticos. El primero referido a los “Mecanismos de protección a favor de los Defensores Ambientales” y el segundo sobre las “estrategias de prevención de delitos ambientales”. El propósito de ambos bloques fue mostrar la importancia de implementar estrategias de prevención de los delitos ambientales, ya que, de esa manera, se contribuye a reducir situaciones de riesgos que enfrentan los Defensores Ambientales. Se contó con la par-

ticipación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, la Defensoría del Pueblo, el Proyecto Prevenir, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA, la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA, en calidad de ponentes. Se contó con más de 200 personas en calidad de participantes de diferentes regiones del país.



6.

Instalación del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental en el marco de la Mesa Verde.

El “Grupo Temático Sectorial Mesa Verde” (en adelante, Mesa Verde) es un espacio de las fuentes cooperantes en temas ambientales y es presidida por el/la Ministro/a del Ambiente del Perú. El objetivo de este espacio es respetar, promover y aplicar los principios de la declaración de París y de Busán para una cooperación eficaz al desarrollo y articular los esfuerzos de la cooperación con las políticas del sector ambiente. La Mesa Verde se organiza en base a grupos de trabajo en materia de Acción Climática, Economía Circular, Bosques y Soluciones Basadas en la Naturaleza y, finalmente, Justicia Ambiental.

De manera específica, el Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental de la Mesa Verde tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de las entidades del Estado encargadas de prevenir la comisión de delitos ambientales, así como supervisar y hacer cumplir el marco normativo ambiental nacional y los compromisos internacionales. Bajo ese marco, el Grupo de Trabajo busca apoyar en intensificar los esfuerzos nacionales encaminados a eliminar el tráfico ilegal de los recursos naturales y fomentar la formalización en materia de aprovechamiento de recursos naturales bajo un enfoque inclusivo y de equidad.

Dicho Grupo de Trabajo cuenta con 3 colideres encargados de su organización y funcionamiento, tales como el Ministerio del Ambiente, a través de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales – UNIDA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Hu-

manos y la Agencia de Estados Unidos al Desarrollo – USAID.

Este grupo de trabajo se instaló el 13 de julio y se ha definido una hoja de ruta de implementación para el periodo 2021 – 2022.



**Grupo de trabajo sectorial
“Mesa Verde”**

7.

Contribución a la Propuesta técnica para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana.

En sesión del Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprobó el documento técnico para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana. La que incluyó los aportes del MINAM en aspectos de i) Generación de evidencia, ii) Institucionalidad, iii) Financiamiento, monitoreo y seguimiento, y iv) Capacitación y difusión. La aprobación de este documento técnico servirá de base para construir una estrategia en materia de prevención de delitos ambientales.



ANEXOS



I.- Dispositivos Legales

- Creación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-unidad-funcional-de-delitos-ambientales-unida-del-resolucion-no-028-2021-minam-1933528-1/>
- Creación de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-la-comision-multisectorial-de-natur-decreto-supremo-no-011-2021-minam-1964387-8/>
- Reglamento Interno de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales: <https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/2045820-140-2021-minam>
- Protocolo Sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales: <https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/2036882-134-2021-minam>

II.- Planes de Trabajo y Documentos

- Plan de Actividades de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de delitos ambientales.
- Plan de Actividades del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental de la Mesa Verde.
- Documento técnico aprobado por la CONAPOC para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía peruana.

III.- Presentaciones efectuadas en eventos públicos

- Alcances de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales – UNIDA y Defensores Ambientales, a cargo de la coordinación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales.
- Acciones para la prevención y reducción de Delitos Ambientales a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental
- Presentación del Grupo de Trabajo de Justicia Ambiental, reglas de funcionamiento y próximas actividades, a cargo de la coordinación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales.
- Alcances de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de delitos ambientales, a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental.
- UNIDA: Impulsando la acción estratégica sobre delitos ambientales, a cargo de la coordinación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales.
- El deber del Estado y de las empresas en la remediación de las vulneraciones de derechos humanos, a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental.
- Justicia Ambiental: Oportunidades y desafíos para el mejoramiento de la regulación ambiental, a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental.
- Estrategias del Sector Ambiente para Combatir la Ilegalidad que afecta los Recursos Naturales y el Ambiente, a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental.
- Justicia Ambiental, Bosques y Género a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
PERÚ 2021